

UN cierto sector del abanico que trata de conformar la opinión

pública española ha empezado a especular, de un tiempo a esta parte, con la designación de un nuevo presidente de Gobierno. Con este propósito se construyen e imaginan complots, se urden operaciones de desgaste en las que aparecen insinuadas circunstancias militares y se fabrican candidatos con técnicas impropias del actual régimen de gobierno.

Esa estrategia de recambio presidencial acelerado responde a épocas pasadas y se juega a todas luces con el ulterior propósito de liquidar, por una u otra vía, el régimen democrático.

El actual presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ha sido elegido para su cargo como consecuencia directa de las elecciones celebradas hace escasamente tres meses. Desde la fecha de la investidura —el 30 de marzo— tiene un mandato de cuatro años, salvo que el propio partido le retire su confianza y se cumplan, en todo caso, los trámites que establece la Constitución.

No existe ningún otro procedimiento legal para sustituir al presidente del Gobierno ni, desde luego, puede admitirse el relevo por otra vía. Quienes tenemos fe en la democracia debemos, sin distinción de colores, evitar por todos los medios que prospere esa otra corriente de opinión. Porque estaría en juego no sólo la supervivencia política del presidente, sino la de la propia democracia como sistema de gobierno.

El período electoral se ha cerrado el 3 de abril con las elecciones municipales, y simultáneamente se ha abierto un plazo de cuatro años, muy difícil y complicado, en el que todos debemos tener como objetivo prioritario la consolidación del sistema político. Y para consolidarlo hay que empezar por respetar las reglas del juego y rechazar las tesis de quienes al calor de circunstancias tan difíciles como las que vivimos nos ofrecen sugerencias de liderazgo por vías heterodoxas.

Entre estas soluciones ninguna más condenable que la que trata de involucrar al Jefe del Estado. Porque entre las misiones que la Constitución le confía al Rey de España no figura la de sustituir al presidente del Gobierno a impulsos de su sola voluntad. El Rey de España está y tiene que estar por encima de la lucha partidista precisamente porque él simboliza valores muy superiores a los que se ponen en juego desde las ideologías de los grupos políticos. No es ésta una recomendación al Rey ni muchísimo menos una advertencia, porque nadie como él conoce el papel primordial de su protagonismo, ya que de la neutralidad de su arbitraje depende en gran medida el futuro de nuestro empeño. Pero hay que invalidar políticamente a quienes se diri-

EL MANDATO PRESIDENCIAL

gen al Rey con argumentos que encubren la amenaza de que si el Rey no actúa y sustituye al presidente caerán sobre España y sobre él males incontables. Muy por el contrario, las adversidades y los problemas para nuestro país y Su Majestad empezarían si se incumpliese el trámite constitucional. Precisamente él que ha sido, entre todos nosotros, el principal promotor para restablecer las libertades individuales y colectivas de nuestro país.

Quienes patrocinan este clima de opinión tienen además un segundo frente de ataque que consiste en extender la especie de que esta legislatura no cumplirá el término de cuatro años. Acabamos de empezarla y ya se empieza a minar la esperanza de los muchos millones de españoles que confiaban en un plazo de cuatro años para trabajar sin incógnitas electorales. Período de tiempo que resulta imprescindible para consolidar nuestra democracia. Para que unos y otros aprendan la función de gobernar y oponerse, tanto a nivel nacional como regional y local; para que los partidos arraiguen en la opinión pública y se despejen las incógnitas ideológicas que todavía confunden al electorado; para que la Administración pública se reestructure con eficacia y para atender a los muchos problemas económicos y de todo tipo que amenazan al Estado y a la sociedad española.

No quiero decir con esto que haya que descartar de forma absoluta la posibilidad de unas elecciones en un tiempo más corto. En épocas de tránsito ocurre a veces que, por circunstancias adversas, hay que renovar la confianza de los electores en plazos menores de los legalmente previstos. Pero ésta ha de ser la excepción y no la regla. Ya tuvimos unas segundas elecciones anticipadas hace tres meses, justificadas por el nacimiento de la Constitución y por la necesidad

imperiosa de renovar nuestros Ayuntamientos. Pero supe-
rada esta fase de in-
terinidad tendremos que acostumbrarnos a períodos regulares de consulta electoral para que la vida pública española no esté siempre pendiente de las urnas.

En este sentido todos los intentos de buscar candidatos presidenciales, a cuatro años vista de unas elecciones, no pueden tener otro propósito que desestabilizar el sistema político que acabamos de iniciar. Propósito que es tanto más desestabilizador cuanto se proponen nombres, en ocasiones, que ni tan siquiera militan en los partidos políticos, como si con ellos se quisiera desautorizar al sistema en virtud del cual se accede y se pierde el Poder.

Que quienes no creen en la democracia fomenten este clima es explicable. Pero que lo hagan quienes piensan —y han pensado en tiempos más difíciles— que la democracia es el menos malo de los sistemas de Gobierno, es más preocupante.

Otra cosa distinta es que la Prensa, los medios de difusión y los otros partidos políticos le critiquen para desgastarle, le acosen en su labor de gobierno y le pidan cuentas de su gestión. Igualmente lícita es la crítica al presidente dentro de su propio partido, ya que la selección de candidatos alternativos forma parte de la dinámica del sistema. Ese es el papel que les corresponde, a unos y otros, en un régimen de libertades.

Ahora bien, esta crítica, que es sustancial al Gobierno democrático, se ejerce siempre en los países libres con gran respeto a la persona del presidente, al enorme esfuerzo y dedicación que representa el ejercicio de su cargo y a la gravedad de las responsabilidades que asume. Si además, como es nuestro caso, le llueven problemas acumulados de muchos errores antiguos y otros nuevos, sin tregua ni descanso, no es desproporcionado pedir un margen de confianza y de tiempo.

Adolfo Suárez ha cumplido tres años de mandato presidencial. Tiene ahora otros cuatro años por delante para intentar resolver problemas ante los que fracasaron los mejores hombres de la República. Problemas que no resolvió una guerra tan cruel como la nuestra ni cuarenta años de silencio forzado. Vamos a ver si durante este cuatrienio de su presidencia podemos, entre todos, encauzar las soluciones que no fueron posibles en el pasado.

Esta reflexión no tiene otro valor que la de venir de quien, a veces, discrepa de la estrategia y de la táctica de su propio Jefe de Gobierno.

Joquín GARRIGUES WALKER